

Santiago, dos de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos antecedentes Rol N° 106700-2023 de esta Corte Suprema, comparece el abogado señor Pedro Prado Navarro, en representación de Rafael Antonio Díaz Medina, deduciendo acción tendiente a obtener la declaración previa para el ejercicio de la indemnización por error judicial, consagrada en el artículo 19 N° 7, letra i) de la Constitución Política de la República.

El Abogado Procurador Fiscal (S) de Santiago, por el Consejo de Defensa del Estado, evacuó el traslado que se confirió al Fisco de Chile, por el que solicita denegar la acción intentada.

El señor Fiscal Judicial (S) de esta Corte Suprema, en su dictamen N° 190, de 5 de diciembre de 2023, sugiere rechazar la solicitud propuesta, por los motivos que detalla en dicha actuación.

Se ordenó traer los autos en relación por dictamen de 21 de diciembre de 2023.

Considerando:

Primero: Que, como fundamento fáctico de la pretensión, se señala que el recurrente Rafael Antonio Díaz Medina estuvo sujeto a las medidas cautelares de internación provisional y prisión preventiva desde el 13 de abril de 2020 al 2 de marzo de 2023, esto es, durante 1054 días, en la causa RIT N° 1029-2020 del Décimo Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, seguida por el delito de homicidio simple.

Explica que en un primer momento los elementos expuestos por el ministerio público al tribunal permitían presumir que el imputado era el autor del



delito de homicidio que se le atribuía, pero con el transcurso de la investigación fueron apareciendo elementos que ponían en duda la inicial presunción de autoría.

Por ello, se solicitó en reiteras ocasiones el cese de la medida cautelar atendida la concurrencia de nuevos antecedentes que merman la acreditación de la concurrencia de los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal.

Manifiesta que el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal atendida la falta de medios de prueba para acreditar la autoría en el delito de homicidio que el Ministerio Público atribuía al recurrente, lo absolvió.

Agrega que tampoco se interpretaron las normas relativas a restringir la libertad personal, de un modo restrictivo, como lo plantea en su inciso final el artículo 5 del Código Procesal Penal, porque en la especie debía aplicarse el principio de presunción de inocencia, el cual se veía potenciado en este caso por la comprobada irreprochable conducta anterior del imputado, que el propio Ministerio Público estableció.

Por ello, solicita declarar que las resoluciones que mantuvieron la prisión preventiva, en cinco ocasiones y sus respectivas confirmaciones por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la causa RIT N° 1029-2020, del Décimo Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de Rafael Antonio Díaz Medina fueron injustificadamente erróneas o arbitrarias, constituyendo una injusta afectación de su libertad personal y que el Estado de Chile deberá indemnizarle el daño moral y/o psíquico que sufrió a causa de dichas resoluciones.

Segundo: Que el abogado señor Marcelo Guerrero Sierra, en representación del Fisco de Chile, al responder el traslado conferido, pidió desechar la pretensión formulada, atendido que el requirente no funda su solicitud,



limitándose a afirmar que fue absuelto de responsabilidad penal tras la audiencia de juicio realizada los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo del 2023, ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Señala que el actor es titular de la acción por lo que debe aportar un relato de los hechos y las pruebas que acreditan su acaecimiento, lo que no acontece en este caso, sin ni siquiera detallar con precisión las resoluciones que son erróneas o arbitrarias, ni expone con claridad el régimen cautelar decretado, haciendo alusión a internación provisional y prisión preventiva.

Añade que por las graves falencias del requerimiento no es posible establecer cuáles son las resoluciones que se tildan de ilegales o arbitrarias, pudiendo desprenderse del libelo únicamente que se trata de un imputado a quien se le formalizó como autor de un delito de homicidio simple, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue revisada en diversas ocasiones.

Arguye que el estándar de convicción requerido para decretar y mantener la prisión preventiva es menor que aquel necesario para condenar, por lo que es perfectamente posible que unos mismos medios de prueba sean suficientes para el primer efecto y no para el segundo.

Indica que la absolución se funda en la insuficiencia de las pruebas rendidas en el juicio oral y contradicciones en que incurrieron los testigos en esa oportunidad, elementos que no fueron conocidos por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones o no hay ninguna constancia de que hubieren sido conocidos.

Hace presente que entre las resoluciones denunciadas como arbitrarias y la sentencia absolutoria aconteció un hecho fundamental entre los elementos que las



fundaron: las contradicciones e inconsistencias del único testigo que presencié los hechos y de los funcionarios policiales.

En consecuencia, no se dan los supuestos para calificar las resoluciones que mantuvieron la medida cautelar como injustificadamente erróneas o arbitrarias, ya que las decisiones adoptadas se basaron en antecedentes expuestos en las audiencias ante el Juzgado de Garantía, de manera que no se debe dar lugar a la indemnización por error judicial.

Por ello, pide rechazar íntegramente la solicitud de declaración de error judicial, por improcedente, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, por último, se recabó el dictamen del señor Fiscal Judicial (S) de esta Corte, que señala que la solicitud cumple parcialmente con las exigencias del artículo 1° del Auto Acordado que Reglamenta el Procedimiento Para Obtener la Declaración Previa al Ejercicio de la Acción Indemnizatoria que concede la letra D del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, publicado en el Diario Oficial del 24 de mayo de 1996, en cuanto a acompañar alguno o algunos de los antecedentes señalados en su artículo 1° letra a) a la letra e), pues solo indica genéricamente las resoluciones que calificó de injustificadamente erróneas o arbitrarias.

Debido a ello quedó acreditado que el recurrente estuvo sujeto a medidas privativas de libertad ordenadas por el Décimo Quinto Juzgado de Garantía, desde el 13 de marzo de 2020, situación que se mantuvo hasta el día 2 de marzo del año 2023, fecha esta última en que se dictaminó su absolución respecto de ser autor del delito de homicidio simple de Jonathan Eliazar Bravo Sáez, ocurrido el 7 de diciembre de 2019.



Indica que las resoluciones que decretaron y mantuvieron sujeto a las cautelares personales de internación provisional y de prisión preventiva al imputado, en tanto establecieron el presupuesto material de la imputación, resultaron contradictorias con la sentencia definitiva que lo absolvió del cargo de ser autor del delito de homicidio simple, por no haber concurrido antecedentes suficientes para establecer su participación en el hecho investigado, y corresponde, en consecuencia, determinar si esta contradicción constituye un error y si el mismo es *“injustificado”*, para los efectos de formular la declaración exigida en la letra i) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informa que la circunstancia que el imputado resultara absuelto de los cargos formulados en su contra porque las pruebas aportadas por el persecutor no resultaban suficientes para formar la convicción exigida para condenar, no significa, por sí sola, que la decisión para decretar las cautelares privativas de libertad, internación provisional y luego prisión preventiva, y mantenerlas durante un tiempo, fueran erróneas, en tanto la exigencia para una y otra decisión judicial es distinta, particularmente en cuanto al nivel de convicción exigido por la ley.

En la especie, las medidas cautelares de internación provisional y de prisión preventiva decretadas, y su mantención luego de revisada judicialmente, no estaban carente de todo fundamento o justificación, existían en contra del imputado diversos antecedentes o indicios de participación, dado el contexto en que se produjo la muerte causada con intervención de terceros de la víctima, hecho ocurrido frente al domicilio del imputado, con los reconocimientos



practicados por testigos, pericias policiales en el sitio del suceso e informes de la Policía de Investigaciones presentados por el ente persecutor.

Esos antecedentes, junto a otros que se expusieron en las oportunidades procesales pertinentes, impiden calificar de errada la resolución en que se decretó la medida cautelar que se reclama, ni tampoco aquellas resoluciones que la mantuvieron, las que la transformaron en prisión preventiva, y sus confirmaciones emitidas por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

De este modo, y como conclusión, es dable afirmar que no concurren los presupuestos exigidos en la norma constitucional establecida en la letra i) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, para formular la declaración solicitada, pues como se verifica de lo expuesto, los antecedentes fueron apreciados soberanamente por los jueces de acuerdo con sus facultades en las oportunidades que les correspondió.

En virtud de las consideraciones y razones expuestas precedentemente, fue de la opinión que se rechace la petición de hacer lugar a la declaración solicitada por Rafael Antonio Díaz Medina.

Cuarto: Que, el artículo 19, N° 7, letra i) de la Constitución Política de la República prescribe que, una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado, de los perjuicios patrimoniales que haya sufrido.

Quinto: Que, la procedencia de la acción otorgada está sujeta al cumplimiento de requisitos claramente delimitados por el constituyente, a saber:



a) Que la resolución que sometió a proceso o condenó al requirente sea injustificadamente errónea, o;

b) Que dicha resolución sea arbitraria.

En la especie, y dado que los hechos materia del enjuiciamiento acaecieron bajo la vigencia del Código Procesal Penal, la cuestión a decidir queda circunscrita a la determinación de si las resoluciones que dispusieron la prisión preventiva e internación provisional y las que las mantuvieron, merecen o no ser calificadas de injustificadamente erróneas o arbitrarias, y para arribar a una conclusión fundada, es menester analizar si aquellas se dictaron sin existir elementos que permitieran fundarlas racionalmente, expidiéndose por voluntad meramente potestativa, caprichosa o irreflexivamente.

Sexto: Que, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado en numerosos pronunciamientos el sentido y alcance de los términos “*injustificadamente errónea*” y “*arbitraria*”, calificativos que solo pueden aplicarse a una resolución judicial que contradice a la razón, que es inexcusable, que ha sido decretada de manera irregular, que carece de una explicación lógica, de motivación y racionalidad. Es decir, no puede erigirse como motivo suficiente y constitutivo de una actuación procesal injustificadamente errónea o arbitraria la discrepancia con los juicios de valor allí emitidos.

Séptimo: Que, en consideración a lo que debe resolverse, también conviene tener en vista las exigencias contempladas en el artículo 140 del Código Procesal Penal para disponer la prisión preventiva u otra medida cautelar. A saber, que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investigare; que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que



el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor; y que existan antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga.

Al momento de dictar una sentencia definitiva, en cambio, los magistrados cuentan con todas las pruebas definitivas allegadas a la litis y, solo del examen de ellas deben adquirir ahora la plena convicción, más allá de toda duda razonable, de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.

El mero hecho de un fallo absolutorio no transforma automáticamente a las resoluciones que dispusieron la prisión preventiva y la internación provisional y las que las mantuvieron en injustificadamente erróneas o arbitrarias, por cuanto, como se advierte, son momentos procesales diferentes que requieren de grados de convicción distintos, con procesos valorativos e interpretativos diversos y, por consiguiente, dichas fases, aun con conclusiones contrapuestas, pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

Octavo: Que, hechas estas precisiones, puede sostenerse que las resoluciones que atañen a estos antecedentes no participan de las características que se les atribuye, de modo que no pueden servir de basamento a la declaración impetrada. En efecto, los antecedentes probatorios invocados para justificarlas fueron múltiples y variados, los que el mismo libelo reconoce que concurrían al



señalar que al momento de decretar la medida cautelar existían antecedentes que presumían la autoría del recurrente en el delito de homicidio atribuido, quedando de manifiesto las contradicciones e inconsistencias de los distintos medios de prueba en el juicio oral.

Por ello, con tales antecedentes, adecuadamente ponderados en la etapa procesal en que las resoluciones se expidieron, no puede sostenerse la existencia de un error injustificado o arbitrario, al concluirse del modo que se hizo al dictarse la prisión preventiva y la internación provisional y la mantención de aquellas en contra de Díaz Medina.

Noveno: Que, la dictación de la sentencia definitiva absolutoria dejó establecido que no se logró adquirir la convicción exigida por la ley de que el imputado haya tenido participación en tal ilícito, pues *"... la prueba de cargo no ha logrado superar el estándar necesario para derribar la presunción de inocencia que beneficia al acusado, lo cual tiene como causa directa la debilidad de las probanzas rendidas en el juicio oral, en particular, las necesarias para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación culpable en el ilícito que se ha tenido por configurado..."*

...De esta manera, las contradicciones entre la descripción de acciones y ubicación espacial del presunto hechor, en la versión dada en la diligencia de reconocimiento -según el relato del oficial NAVARRO- por el testigo MAURICIO DURAN con la entregada en audiencia de juicio, resultan insalvables, todo lo cual le resta valor al reconocimiento efectuado en sede policial y por ende a la imputación penal.



A lo anterior se une la generalización o simplificación en la explicación de la forma en que se llevaron a cabo las diligencias investigativas por parte de la policía, en particular, la forma de determinar al sospechoso, todo ello sin considerar que en las acciones atribuidas al hechor por los testigos DURAN y GONZALEZ en la diligencia de reconocimiento, lo eran al sujeto que mantuvo la discusión con Jonathan dato que por sí solo variaba el sentido y sujeto sindicado inicialmente como tirador, pues tal como lo indicó DURAN al tribunal, el sujeto que dispara era uno distinto de aquel con quien la víctima “mantuvo la discusión” el que se situaba al medio de la calle impidiendo el paso del vehículo que conducía Jonathan . De esta manera, las contradicciones e incongruencias antes anotadas, a la luz del observador imparcial, solo se traducen en un déficit de imputación que no es posible sortear...

...En otras palabras, la investigación realizada si bien arribó a un resultado o conclusión policial, sin embargo, analizada y ponderada la prueba que de ella emana esta no ha alcanzado el estándar requerido para tener por acreditada la participación del acusado en los hechos...”

Décimo: Que, el artículo 340 del Código Procesal Penal exige, para dictar sentencia condenatoria, una absoluta convicción, exenta de toda duda razonable del ente jurisdiccional acerca de la existencia del hecho punible y la culpabilidad del acusado -estándar que para los jueces del fondo no se satisfizo-; en cambio, los requerimientos del artículo 140 del mismo texto legal sirven de sustento a una resolución "eminentemente provisional", que con nuevos y mejores antecedentes puede ser dejada sin efecto por el propio juez que la dictó.



Como se dijo, se trata de dos estadios procesales claramente diferenciados, que demandan estándares de prueba de entidad diversa, de manera que aún en el evento de que una resolución judicial pueda apreciarse como errónea, desde una perspectiva posterior, distanciada del momento en que aquella se dictó, esta circunstancia no implica necesariamente que haya carecido de toda justificación, de fundamento racional y de motivo plausible.

Undécimo: Que, estos razonamientos llevan a concluir que las resoluciones que dispuso la prisión preventiva y la internación provisional, y las que las mantuvieron, que afectaron al recurrente, no fueron injustificadamente erróneas ni arbitrarias, de modo que no se satisfacen las condiciones que de acuerdo la Carta Fundamental hacen procedente la declaración que corresponde a esta Corte Suprema.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de acuerdo, además, con lo prevenido en el Auto Acordado que sobre esta materia emitió este Tribunal el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, **se rechaza** la solicitud de declaración previa de existencia de error judicial formalizada por el abogado Pedro Prado Navarro, en representación de Rafael Antonio Díaz Medina.

Regístrese y archívese.

Rol N° 106.700-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama, Sr. Leopoldo Llanos S., las Ministras (S) Sra. Eliana Quezada M. y Sra. María Carolina Catepillán L., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma la Ministra (S) Sra. Catepillán, no obstante haber



estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber terminado su periodo de
suplencia. Santiago, 02 de junio de 2025.



En Santiago, a dos de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

